

## EDITORIAL

# LAS ELECCIONES DE MARZO DE 1985

El día 31 de marzo se realizarían las elecciones para Diputados y Concejales Municipales en todo el país. Con este paso se pretendía concluir el proceso electoral, devolviendo a la nación el derecho de elegir a sus representantes en los diversos niveles de poder, a través del voto directo.

Como indicábamos ya en el editorial anterior, en El Salvador tradicionalmente ha prevalecido un régimen presidencialista, por lo que estas elecciones adquieren un carácter secundario. Sin embargo, la asunción al poder del Ing. Duarte y el PDC, por la votación del 6 de mayo de 1984, estuvo acompañada de una circunstancia atípica en la vida política salvadoreña. La Asamblea Legislativa, convertido en tal, una vez concluida la Constitución Política, por los mismos diputados elegidos en 1982, tenía una correlación de fuerzas contrarias al partido gobernante que contaba con una minoría, lo que repercutiría no sólo en la tarea legislativa —y en lo que el ejecutivo dependería de ésta—, sino también en el hecho de que otros órganos o instancias de poder sumamente importantes, como la Corte Suprema de Justicia, la Corte de Cuentas y la Fiscalía General de la República, estaban ocupadas por miembros de la "oposición". Por lo que respecta a los Concejales Municipales, una distribución proporcional, emanada del "Pacto de Apaneca", repartía el limitado poder que detentan.

Las elecciones de marzo de 1985, por consiguiente, si bien eran de carácter secundario, con todo tenían un significado importante, bien fuera para evaluar el grado de satisfacción del pueblo con la gestión democristiana, bien fuera para recomponer las fuerzas políticas, consolidar los diversos partidos, bien fuera, sobre todo, para definir un proyecto de acción política durante los tres próximos años en los que no se van a realizar elecciones si el sistema continúa. De todos modos, estas elecciones se convertirían en la culminación de un proceso democratizador, y en la legitimación del mismo y del sistema, potenciando así las políticas concretas, tanto económicas y sociales, como de guerra contra la izquierda y de apoyos internacionales.

El significado, secundario ciertamente, pero importante, que se le

atribuía, quedó patente en la lucha que se libraría, primero, en el campo legal y político. La Asamblea aprobó una Ley Electoral acorde con los intereses de la mayoría imperante en su seno, pero contraria a los del PDC, por lo que el Presidente Duarte recurriría a un procedimiento inusual: vetar unos pocos artículos, aprobar el resto de la ley, y mandarla a publicar en el Diario Oficial. Tras largas polémicas y enfrentamientos, la Asamblea ratificaría la ley original, mandándola también a publicar, mientras se apelaba a la Corte Suprema de Justicia para el fallo final, que ratificaría la de la Asamblea. Relacionado con lo anterior, ARENA y PCN firmaron una coalición a nivel nacional, y ambos se coaligaron con PAISA para intentar ganar la alcaldía de San Salvador. La derecha política, por lo tanto, unía sus fuerzas para mantener la supremacía en el órgano legislativo y en una base fundamental de poder local, ante el temor de una consolidación y fortalecimiento del PDC; además, el mecanismo aprobado por las coaliciones, con la suma de votos marcados para cada partido, pretendía incrementar los de la derecha, introduciendo la ambigüedad de la identidad partidaria para los votantes.

En segundo lugar, la campaña marcaba también la polarización política existente entre los partidos; cuestionamiento y ataque frontal a la gestión pedecista y a su máximo líder, por un lado, frente al planteamiento de que el presidente Duarte y el PDC son la mejor solución y alternativa ante cualquier otro personaje o fuerza política, por lo que necesita el respaldo mayoritario del pueblo para no ser entorpecido en su trabajo en favor del país. La primera parte de la campaña se libró a nivel muy personal y agresivo, pasando a una segunda fase menos personalizada en la que se contrastaban logros y fracasos con proyectos más genéricos. En todo caso, la campaña estaba marcadamente centrada en la imagen y personalidad de líderes —a pesar de que la elección no era presidencial—, pasando desapercibidos los elegibles a los distintos cargos; lo cual podría redundar en detrimento de los partidos que carecen de líderes carismáticos de arrastre popular.

El curso de los acontecimientos nacionales —políticos, militares, económicos y sociales— sin cambios significativos; la correlación de fuerzas socio-políticas inalteradas durante el último año; la carencia de cambios o hechos sustanciales que modificaran el comportamiento electoral, no auspiciaban cambios sustanciales en los resultados de la elección del 31 de marzo. El que no hubiera utilizado el PDC como bandera política, a modo de referéndum, el diálogo con los frentes —lo que de haberlo hecho, podría haber volcado al electorado a su favor en forma aplastante—, le quitaba la novedad y el arrastre potencial, al mismo tiempo que indicaba, o la conciencia de las graves dificultades —si no imposibilidad— para continuarlo y profundizarlo, o la falta de voluntad política en avanzar por ese camino, o algún tipo de pacto interpartidario para no utilizarlo como bandera política ni a favor ni en contra. Sin embargo, las declaraciones de Duarte y de Rey Prendes, al final de la campaña, en el sentido de que cualquiera que fuere el resultado de las elecciones se continuaría con el diálogo, podrían incidir de algún modo en las votaciones.

Por todo ello, con anterioridad a la emisión de votos, las previsiones, en las que coincidían sustancialmente las distintas fuerzas políticas, eran de unos resultados muy similares a los de marzo de 1984, con un ligero incremento de la DC, por el hecho de estar en el poder y aprovecharse de la imagen y mecanismos gubernamentales, pero sin poder conquistar una mayoría de diputados; una consolidación de ARENA y AD; un pequeño debilitamiento del PCN, no sólo por pérdida de identidad debida a la coalición y a la carencia de fondos para una campaña saturante, así como por la ausencia de un líder reconocido y arrastrador de masas, sino también por la escisión de PAISA; en fin, la práctica desaparición de los partidos minoritarios, incluido el mismo PAISA. Daba la impresión de que la alta política, y la voluntad de los EE.UU., veía en esos resultados previstos la mejor solución para el equilibrio y estabilidad de los poderes, sin posibilidades de introducir nuevos cambios importantes o de concentrar demasiado poder en el gobierno, al mismo tiempo que se forzaba a la derecha a una moderación por el ejercicio de la vía democrática y la concesión de una cuota importante de poder. Los pactos políticos subsiguientes, principalmente entre PDC, AD y cuando menos algunos diputados del PCN, posibilitarían el ejercicio del gobierno y un inestable equilibrio de poder.

Los resultados de la votación del 31 de marzo, sin embargo, tomarían por sorpresa a todos los observadores y analistas. En primer lugar, el número de votantes fue significativamente inferior al de anteriores eventos, lo que tendría explicación, en parte, en el hecho de que el país es básicamente presidencialista, en parte por el hastío de tantas votaciones en corto tiempo sin mayores resultados inmediatos, en parte por el vacío de contenido de la misma campaña, en parte, por la determinación de que se votara en el propio municipio, lo que impedía la afluencia de muchos desplazados, en fin, por el hecho de coincidir con un día especial (Domingo de Ramos), en el que mucha gente juzgaba prioritario asistir a los actos religiosos —se veían en las filas de votantes a muchas personas con la palma bendita en las manos—, mientras otros iniciaban sus vacaciones en el mar o en el extranjero. La guerrilla no obstaculizó de manera importante la votación en la mayor parte del territorio, como para justificar el descenso de votos. Pero el incremento de votos nulos y abstenciones sí fue notorio, lo que se podría atribuir al desencanto por la gestión gubernamental, por la misma campaña, así como a un voto tácito por la izquierda.

Primero sería la cadena de TV hispana de los EE.UU. (SIN) la que daría un pronóstico de los resultados, como consecuencia del sondeo realizado con los votantes; luego los resultados ofrecidos por el PDC en base a sus actas; por último, los partidos coaligados, que al verse derrotados presentarían un recurso de nulidad alegando infinidad de irregularidades, pero que en el fondo era un reconocimiento del resultado de la votación, que no esperaban y que lucharían por modificar a su favor. Algo inusitado fue la presentación, por cadena nacional, de todo el Alto Mando y Comandantes militares, para hacer presión a respetar los resultados electorales. Dos elementos son importantes en este hecho: primero, la unidad monolítica de todos ellos, que pudiera ser natural o inducida por altos inte-

reses de estado y por influjo externo; segundo, la convicción de que el enemigo principal de todos es la izquierda, ante el cual hay que unirse a todo nivel, y dejar en su papel secundario las elecciones y el reparto del poder político; la guerra es lo primero, y no se pueden derivar recursos para una nueva votación, que puede significar otra vez más de 70 muertos en la institución armada, centenar y medio de heridos, y algunos desaparecidos (capturados por la guerrilla). Como consecuencia de esta presentación pública, el CCE denegó unánimemente la petición de nulidad, aunque no por tal presión —declararían sus miembros—, y comenzó un lento y paralizante escrutinio de los votos.

El gran ganador del 31 de marzo fue sin duda el PDC, que obtendría 33 diputados y más de dos terceras partes de los Concejos Municipales, incluidos los más importantes y más poblados, así como una mayoría de votos en todos los departamentos menos Cabañas y Cuscatlán, incluso en los que en 1984 ARENA obtuvo resonantes victorias. Sin embargo, el porcentaje de votos totales válidos de la DC no fue significativamente superior al de mayo de 1984, si bien el esquema electoral secundario arrojaría distintos resultados departamentales y locales. ARENA, a su vez, también con un porcentaje similar al anterior, vería sustancialmente disminuidos sus elegidos, no sólo por el carácter de esta elección, sino también por el reparto de puestos en la coalición. El PCN, por su parte, fue el gran perdedor en cuanto a base social y a votos recibidos, bajando a menos de la mitad relativa, pero al mismo tiempo fue el gran ganador por su habilidad política dentro de la coalición, logrando un número de representantes desproporcionadamente superior a los votos propios que obtuvo; por otro lado, la crisis interna del partido, reflejada primero en la solicitud de nulidad de las elecciones, y luego en la protesta y denuncia de gran parte de la directiva contra el Secretario General del partido, se resolvería en la Asamblea General del PCN en la que triunfaría la línea más aperturista, y que llevará a una recomposición de fuerzas políticas y a un posible entedimiento de una fracción del PCN con el PDC.

El resto de partidos obtuvieron una proporción de votos que los sitúa en su verdadera posición política, dada la polarización de fuerzas que cada vez se va marcando más acentuadamente.

El sorprendente resultado a favor del PDC, que no puede ser consecuencia de la gestión gubernamental exitosa en ningún aspecto relevante, habrá que explicarlo por factores distintos. Desde una perspectiva más coyuntural, estaría, en primer lugar, la imagen del Presidente, en la que se centró la campaña de su partido, unida a la solicitud de un voto de confianza y apoyo para poder realizar lo que se le ha obstaculizado; en segundo lugar, la percepción en una parte de la población, de que el PDC es el partido "oficial", lo que arrastraría a un buen número de votantes, y que se manifestaría en el traspase de seguidores tradicionales del PCN hacia el PDC; por otro lado, la disminución de la propaganda saturante de otros partidos —tal vez por carecer de suficientes recursos financieros—, junto con una orientación equivocada, o poco efectiva, de la misma; la expectativa surgida en gran parte de la población de que con el PDC es más viable una

solución política que termine con el conflicto bélico, unido a cierta distensión y estabilidad política coincidente con el último gobierno; en fin, el comportamiento más neutral de los comandantes militares, sobre todo en los departamentos en los que la anterior votación arrojó un resultado favorable a los partidos de la derecha. Desde una perspectiva más estructural, por otro lado, se pueden formular hipótesis parcialmente explicativas, si es que se admite la existencia de una crisis en la derecha, que ha perdido cierta hegemonía al no tener alternativas viables para la sociedad en su conjunto, y las bases de sustentación tradicionales, tanto ideológicas como de fuerza y sostén internacional; si se acepta al mismo tiempo que la izquierda pueda haber perdido también parte de su atractivo de solución alternativa al volverse cada vez más inviable su proyecto por la decisión firme norteamericana en su contra; todo ello, habría creado un espacio más amplio en el centro del espectro, que habría sabido rearticular el PDC y capitalizar las bases de sustentación militar, ideológica e internacional. Sin embargo, ésto más bien apuntaría hacia una afluencia masiva a las urnas, para apoyar tal solución lo cual es contrario a lo que de hecho ha sucedido.

De los resultados del 31 de marzo se pueden esperar y prever algunos cambios en la política y en el proceso salvadoreño, tanto más cuanto que en los próximos tres años no se volverá a consultar al pueblo por medio del voto. El gobierno y el PDC se han consolidado en el poder, e incluso pueden ampliar sus pactos interpartidarios, lo que podría conformar un centro democrático más amplio y robustecido; como consecuencia, se verá menos entorpecido en su gestión pública, siempre que los partidos de derecha se mantengan dentro de una lucha partidista y democrática. El gobierno negociará con ellos para obtener una cierta paz social, a cambio de concesiones económicas y apoyo a la iniciativa privada. Sin embargo, como el poder real no radica en el número de votos ni en el de representantes electos, el margen de acción autónoma es restringido, tanto para la reactivación económica como para el curso de la guerra, el impulso al diálogo y negociación —primer momento de evaluación de su poder y autonomía que se le presenta a las inmediatas—. De todos modos, el 31 de marzo de 1985 ha constituido una mayor legitimación del esquema salvadoreño, que revertirá en mayor apoyo internacional —especialmente de los EE.UU. y países de Europa—, tanto en lo económico como en el respaldo a la guerra. Sin embargo, el diálogo con la izquierda puede tener menos oposición interna, siempre que se garanticen los intereses de la institución armada y de los EE.UU. Pero se requiere la pacificación como condición indispensable para cualquier proyecto real y eficaz de reactivación económica, social y política, o para cualquier solución verdadera que se busque para el país.

**Consejo de Redacción**